



*Congreso de la República  
Guatemala, C. A.*

00000033

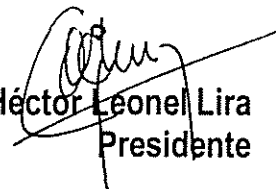
12 de octubre del 2016

Licenciado  
Luis Eduardo López Ramos  
Encargado del despacho  
Dirección Legislativa  
Congreso de la República  
Su Despacho.

De manera atenta me dirijo a usted y de conformidad con lo estipulado en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, adjunto a la presente **DICTAMEN FAVORABLE** emitido por esta Comisión a la iniciativa de ley identificada con número 5083 que dispone aprobar **LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE GUATEMALA**, para su trámite respectivo.

Atentamente,



  
Héctor Leonel Lira  
Presidente



00000034

*Congreso de la República  
Guatemala, C. A.*

**COMISIÓN DE REFORMAS AL SECTOR JUSTICIA**

**DICTAMEN**

**Honorable pleno**

Con fecha 01 de junio de 2016, el Honorable Pleno del Congreso de la República conoció y remitió a la Comisión de Reformas al Sector Justicia, para su estudio y dictamen la iniciativa de Ley, identificada con el Registro Número 5083 de Dirección Legislativa, presentada por el Presidente del Congreso de la República de Guatemala, Mario Taracena Diaz-Sol, que dispone aprobar "LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE GUATEMALA", respectivamente, para que se pronuncie sobre su importancia y conveniencia. Esta iniciativa pretende construir y definir la política criminal democrática del Estado de Guatemala, a través de la creación de una línea de estrategias entre la Presidencia de la República de Guatemala, Presidente del Congreso de la República de Guatemala, Presidente del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia y Fiscal General de la República de Guatemala y Jefe del Ministerio Público, como instituciones vinculadas con la seguridad y el sector justicia, con el fin de controlar y enfrentar el fenómeno de violencia y criminalidad que atraviesa el país, mediante cuatro ejes principales, siendo estos la prevención, investigación, sanción y reinserción en coordinación con las organizaciones de sociedad civil y demás actores ciudadanos.

*[Handwritten signature]*





00000035

*Congreso de la República  
Guatemala, C. A.*

**a) Antecedentes:**

1. La Constitución Política de la República de Guatemala, mediante su articulado establece que es deber del Estado, garantizar la vida, la integridad, la seguridad, la paz y el desarrollo de los ciudadanos.
2. Es innegable que la criminalidad y la violencia en el Estado de Guatemala, ha ido aumentando de forma desenfrenada, acarreado consecuencias fatales, como la muerte, violencia, e inseguridad y subdesarrollo, y para disipar dicha realidad, el Estado de Guatemala hasta el día de hoy ha hecho uso de forma expansiva del Derecho Penal como instrumento de gestión de los grandes problemas sociales, a pesar de lo que establece el principio de intervención mínima de estado de justicia penal, el cual establece la intervención limitada del estado con su poder de coerción penal, para sancionar conductas antisociales de lesividad intolerables, en virtud de otro principio garantista y democrático del derecho penal, que establece que solo se debe acudir cuando fallan las otras formas jurídicas y sectores del derecho, se debe apelar al derecho punitivo como ultima ratio legis y no para solucionar cualquier controversia o conflicto de intereses, cuando existen otras vías jurídicas de solución.
3. Cabe reconocer que a pesar que hasta el día de hoy, cada institución relacionada con la seguridad y la justicia, ha realizado su mejor esfuerzo y cooperación para enfrentar la problemática social de criminalidad, esta no ha sido conjunta, ya que el estado de





00000036

*Congreso de la República  
Guatemala, C. A.*

4. Guatemala, carece de política criminal de forma integrada, provocando con ello la duplicidad de esfuerzos y resultados negativos.

b) ¿Qué es la Política Criminal?

De conformidad con Santiago Mir Puig, la Política Criminal comprende todas aquellas acciones que un Estado realiza para la prevención, combate y tratamiento del crimen en todas sus manifestaciones.

La política criminal es el instrumento de acción que el Estado debe adecuar en el campo de la prevención del delito y la justicia penal, utilizando un conjunto de principios, métodos, estrategias y decisiones para organizar y desarrollar los criterios generales que deben orientar al aparato estatal para prevenir y perseguir racionalmente los hechos delictivos cometidos en un determinado contexto social, organizando y desarrollando eficientemente la actividad de investigación criminal para la consecuente efectividad en la persecución penal, a la vez organizar y desarrollar los componentes básicos de justicia criminal establecidos por el mismo Estado en el marco legal, mediante el conocimiento y juzgamiento penal de los casos sometidos a la jurisdicción penal, así como también de las actividades propias que conlleva la ejecución de la sentencia penal con el fin de garantizar el objetivo político que el estado ha formulado para la sanción penal.





00000037

*Congreso de la República  
Guatemala, C. A.*

**c. Contenido de la Iniciativa 5083:**

La presente iniciativa se presentó en respuesta a la demanda ciudadana, con el fin de perseguir el objetivo que plantea la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala, fundamentada en lo que para el efecto establece la Constitución Política de la República de Guatemala, el derecho nacional, e internacional relacionada con derechos humanos debidamente ratificados, creando un Sistema Nacional de Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala, y lograr con ello la dismunición del los índices de criminalidad y violencia social, través de estrategias de prevención, investigación sanción y reincersión social que permitan el desarrollo integral, la convivencia social armónica y seguridad ciudadana para los y las guatemaltecas.

*[Firma manuscrita]*

El cual queda así:

1. Define la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala, al conjunto de acciones, medidas, estrategias, y decisiones de prevención, investigación, sanción y reinserción social, así como o necesarias a nivel nacional, como regional, departamental, municipal y comunitario, que en forma articulada el Estado asume con el objeto de disminuir los índices de criminalidad y violencia social.
2. Señala principios rectores, tales como: la dignidad de la persona, la estabilidad de la política, preeminencia de la prevención, intervención mínima, división de roles institucionales y

*[Firma manuscrita]*





00000038

*Congreso de la República  
Guatemala, C. A.*

3. responsabilidades compartidas, diversidad y pluriculturalidad, victimización secundaria, derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad, promoción del diálogo de las partes en conflicto, publicidad y rendición de cuentas, enfoque de sistema, investigación y estudio, fortalecer las estrategias de seguridad a nivel regional centroamericano, y respeto e incorporación de convenios internacionales.
4. Fija cuatro principales lineamientos estratégicos:
  - a) Prevención: Implementa Política Criminal de Prevención del Delito, con el fin de alertar los conflictos, tales como campañas de sensibilización de cultura de paz, convivencia armónica y tolerancia ciudadana, fomentando principios y valores en diferentes medios de comunicación, entre otros.
  - b) Investigación: Implementa mecanismos más adecuados de uso de la información, planificación de acciones, a nivel nacional y regional, selección de casos; y, para enfrentar los distintos fenómenos criminales, particularmente de las áreas priorizadas, de conformidad con las condiciones específicas de los distintos departamentos e incidencia criminal.
  - c) Sanción: Racionaliza el uso de la pena privativa de libertad, considerando la intensidad de la lesión a los bienes jurídicos que afecta a la convivencia armónica, las condiciones particulares del autor del hecho delictivo y de la víctima, en proporcionalidad a la afectación del bien jurídico lesionado. Reconoce la necesidad de fortalecer los





000000039

*Congreso de la República  
Guatemala, C. A.*

- d) mecanismos alternos de conflictos y ampliar las alternativas de sanción previstas en la legislación penal.
- e) Reinserción social: Implementa mecanismos que posibiliten el cumplimiento del fin resocializador y rehabilitador de la sanción y políticas para el retorno de las personas que egresan del sistema penitenciario al contexto social, evitando que vuelvan a delinquir.

4) Fija cuatro ejes transversales de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala:

- a) Lucha contra la corrupción,
- b) Lucha contra la impunidad,
- c) Lucha contra la discriminación y el racismo;
- d) Ética y profesionalismo.

5) Establece enfoques y perspectivas que deben estar reflejadas en todas las decisiones de la Política Criminal Democrática, siendo ellas: el enfoque de género, perspectiva victimológica, pertenencia cultural y lingüística, acceso a la justicia para poblaciones vulnerabilizadas.

6) Diseña estrategia de Comunicación tanto en el interior como exterior de la República, con el fin de divulgar la política criminal democrática del estado de Guatemala, atendiendo a la necesidad de involucrar a los medios de comunicación, dado al impacto que tiene sobre la percepción de seguridad en la ciudadanía.





00000040

*Congreso de la República  
Guatemala, C. A.*

7) Integra el Sistema Nacional de Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala por:

- a) Consejo Nacional del Sistema de Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala.
1. Presidente de Guatemala, a través del Ministro de Gobernación.
  2. Presidente del Congreso de la República de Guatemala, a través del Presidente de la Comisión de Reformas al Sector Justicia.
  3. Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, a través de un Magistrado que integre la Cámara Penal.
  4. Fiscal General de la República de Guatemala y Jefe del Ministerio Público, por el Secretario de Política Criminal

**Atribuciones:**

Serán los encargados de definir, implementar, monitorear, evaluar, actualizar y recomendar las acciones con el fin de garantizar el cumplimiento de la política criminal presentada por los tres poderes del estado.

Suscribir documentos que sean necesarios para facilitar dichas implementaciones de las decisiones, procurarán los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento y el alcance de los objetivos del sistema nacional de política criminal, recomendarán la aprobación, reforma y derogatoria de normas atinentes a la política criminal, para evitar la vigencia de las leyes casuísticas o espontáneas, así como la reforma constitucional para







00000041

*Congreso de la República  
Guatemala, C. A.*

fortalecer el sistema de justicia, revisarán toda aquella legislación y demás instrumentos jurídicos, que deberán adecuarse a los principios y lineamientos de la política criminal,

Presentarán un informe anual sobre los resultados obtenidos.

Tendrán dos tipos de sesiones:

1. Ordinarias: El consejo sesionará ordinariamente cada dos meses mediante convocatoria del Presidente de la República de Guatemala, debiendo faccionar un acta de cada una, que contenga acuerdos finales de las sesiones de trabajo.
2. Extraordinarias: El consejo se podrá reunir extraordinariamente en cualquier tiempo, ya sea por convocatoria del Presidente de la República de Guatemala o a solicitud de cualquiera de los integrantes del Consejo.

*[Firma manuscrita]*

- b) Secretaría Ejecutiva del Sistema de Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala.

Será coordinada por un Secretario Ejecutivo, quien será el encargado de dar seguimiento de las decisiones asumidas por los miembros del Consejo, estará adscrita al Ministerio Público y además tendrá a su cargo la coordinación administrativa y técnica multidisciplinaria necesaria.

*[Firma manuscrita]*





00000042

*Congreso de la República  
Guatemala, C. A.*

Funciones:

Será el encargado de ejecutar las decisiones asumidas por el consejo, elaborar y proponer al consejo proyectos de convenios de cooperación, centralizar, sistematizar y analizar la información criminal, a partir de los sistemas y registros oficiales y demás fuentes de información, elaborará y presentará al Consejo el Plan Estratégico de Implementación y el Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Política Criminal, apoyará con la convocatorias de las sesiones ordinarias y extraordinarias, participará en la sesiones, suministrará información actualizada al Consejo, relativa a las tendencias y al comportamiento de los fenómenos criminales, o cualquier información útil al Consejo.

Además presentará bimensualmente al Consejo informe del avance en la implementación de las decisiones y acciones designadas, presentará su plan operativo anual.

8) Recursos para Funcionamiento: El Ministerio Público dispondrá del personal y recursos necesarios para el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional del Sistema de Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala.

9) Convocatoria de la Primera Sesión Ordinaria: El Presidente de la República de Guatemala dentro de quince días de entrada en vigencia la ley, deberá convocar a la primera sesión ordinaria, momento en la que el Fiscal General y Jefe del Ministerio Público deberá informar quién fungirá como Secretario Ejecutivo; ahora bien, si el Presidente de la República de Guatemala no hiciere la misma, dicha convocatoria la podrá realizar cualquiera de los integrantes del Consejo.

10. Establece además el plazo de noventa días para la aprobación del reglamento respectivo.





00000043

*Congreso de la República  
Guatemala, C. A.*

**CONCLUSIONES:**

Esta Comisión, al analizar la iniciativa estima que la misma es viable, ya que la misma otorga instrumentos, lineamientos y estrategias eficaces que coadyuvarán a la estructura de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala, unificadas, coherentes y sostenidas a través de los tres poderes del estado de Guatemala y el Ministerio Público, para reducir y enfrentar el fenómeno criminológico, con el fin de garantizar de forma efectiva los derechos fundamentales de los ciudadanos, tales como la vida, la seguridad, integridad, la justicia, el orden, el desarrollo integral, y

así restaurar y mantener la armonía y la paz social que la Constitución Política de la República de Guatemala y Convenios Internacionales Sobre Derechos Humanos ordenan; dado a la urgencia del mismo, por los escasos resultados que han tenido las instituciones vinculadas con el sector justicia y seguridad a pesar de sus múltiples esfuerzos, ya que cada institución hasta el día de hoy ha asumido su política de forma separada y se ha dado la necesidad de mitigar dicho fenómeno con la sanción punitiva del estado, lo cual ha generado efectos negativos en el país.

Por lo antes expuesto la Comisión de Reformas al Sector Justicia emite **DICTAMEN FAVORABLE** a la iniciativa 5083, para que el honorable Pleno decida sobre el mismo. Fundamento legal: Artículos: 1, 2, 157, 174, del 176 al 180 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 27, 29, 33, 39, 41, 43 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del Congreso de la República.





00000044

*Congreso de la República*  
*Guatemala, C. A.*

DADO EN LA SALA DE LA COMISION DE REFORMAS AL SECTOR JUSTICIA, EN LA CIUDAD  
DE GUATEMALA, EL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

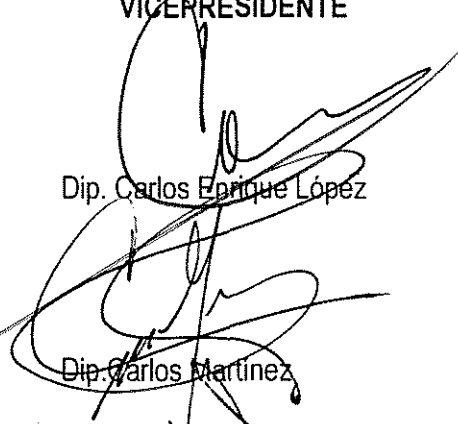
  
Dip. Héctor Leonel Lira  
**PRÉSIDENTE**

Dip. Cesar Emilio Fajardo  
**VICEPRESIDENTE**

Dip. Juan José Porras  
**SECRETARIO**

  
Dip. Carlos Enrique López

  
Dip. Nineth Vareña Montenegro

  
Dip. Carlos Martínez

  
Dip. Raul Romero Segura

  
Dip. Dorian Taracena Godínez

  
Dip. Mayra Alejandra Carrillo





00000045

*Congreso de la República  
Guatemala, C. A.*

  
Dip. Cornelio Gonzalo García

Dip. Delia Emilda Back de Monte

Dip. José Alejandro de León

Dip. María Stella Alonzo Bolaños



DECRETO NÚMERO \_\_\_\_\_ -2016

## EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

**CONSIDERANDO:**

Que el Estado de Guatemala se organiza para la búsqueda de la realización del bien común y para garantizar a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral; siendo necesario el impulso de políticas públicas que permitan alcanzarlo.

**CONSIDERANDO:**

Que el Estado de Guatemala ha incluido dentro de sus políticas públicas la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala, la cual tiene por objeto reducir los niveles de criminalidad y violencia mediante lineamientos estratégicos por medio de la articulación de esfuerzos conjuntos entre la institucionalidad pública, las fuerzas sociales y el acompañamiento de la cooperación internacional.

**CONSIDERANDO:**

Que la convivencia intercultural armónica y el afianzamiento de una cultura de paz como elementos de cohesión del tejido social, ha sido siempre el ideal de la población guatemalteca por el que se ha luchado de distintas formas. Por ello, la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala, orientada a gestionar la violencia y la criminalidad, suma los esfuerzos necesarios para contribuir en esa dirección.



**CONSIDERANDO**

Que es necesario que el país cuente con un mecanismo idóneo, responsable de la implementación, monitoreo, evaluación, reajustes y actualización de Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala.

**POR TANTO:**

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala,

**DECRETA:**

La siguiente,

**LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE GUATEMALA****CAPÍTULO I****DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 1. Objeto de la ley.** La presente ley tiene como objeto, crear el Sistema Nacional de Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala, para coordinar y facilitar la articulación entre instancias de gobierno y de la sociedad guatemalteca para el abordaje integral de la criminalidad y la violencia en el país, en el marco de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala.

**Artículo 2. Definiciones.** Para efectos de la presente ley se entiende por:



- a) Ejes transversales. Son los temas que atraviesan e interactúan en todos los contenidos de los cuatro ejes fundamentales de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala.
- b) Justicia restaurativa. Es una respuesta frente al delito, que enfatiza la sanación de las heridas causadas o reveladas por el mismo en víctimas, delincuentes y comunidades, a través de mecanismos que potencian la resolución pacífica de los conflictos.
- c) Población vulnerabilizada. Son las personas que por sus condiciones físicas, sociales, culturales y económicas se encuentran en situación de riesgo latente.
- d) Política pública. Son proyectos y actividades diseñados por el Estado y gestionados a través del gobierno y sus instituciones para llevar bienestar y satisfacer las necesidades de su población.
- e) Principio de convencionalidad. Es tomar todas las medidas que sean necesarias para la aplicación y libre ejercicio de los tratados internacionales que son ratificados.

## CAPITULO II

### POLÍTICA CRIMINAL DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE GUATEMALA

**Artículo 3. Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala.** Para los efectos de la presente ley, se entenderá por Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala, el conjunto de acciones, medidas, estrategias y decisiones de prevención, investigación, sanción y reinserción social, así como otras necesarias tanto a nivel nacional, como regional, departamental, municipal y comunitario, que en forma articulada el Estado asume con el objeto de disminuir los índices de criminalidad y violencia social.





**Artículo 4. Objetivo de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala.** La Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala tiene como objetivo disminuir los índices de criminalidad y violencia social, mediante la implementación y creación de estrategias de prevención, investigación, sanción y reinserción social que permitan el desarrollo integral, la convivencia social armónica y seguridad ciudadana para las y los guatemaltecos.

**Artículo 5. Principios rectores.** La Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala debe considerar los siguientes principios rectores, los cuales constituyen un mínimo y, por ende, susceptibles de ser superados:

- a) **La dignidad de la persona.** Ubica al ser humano y su dignidad, así como el respeto a los derechos humanos como el eje central de las decisiones, fortaleciendo el principio de igualdad social y el reconocimiento de las diferencias.
- b) **La estatalidad de la política.** Se reafirma el carácter institucional de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala, garantizando su continuidad en el tiempo, ajena a los cambios políticos o relevo de los gobiernos.
- c) **Preeminencia de la prevención.** Como principal herramienta para la atención de la violencia y la criminalidad, se enfatizan las acciones que reduzcan y eviten la comisión de delitos, lo cual permitirá al mismo tiempo evitar el colapso del sistema de justicia penal, por carecer de la capacidad para darle respuesta efectiva a los miles de casos que anualmente se presentan.
- d) **Intervención mínima.** Se define el carácter de la intervención del Sistema de Justicia Penal como la última instancia de resolución de conflictos y solamente para los casos más graves, impidiendo además que se causen más daños. En este contexto, se reconoce el carácter social del fenómeno delictivo y los factores multicausales que intervienen.



- e) **División de roles institucionales y responsabilidades compartidas.** Se reafirma y garantiza el rol del Ministerio de Gobernación como responsable del manejo de la seguridad interior y del Ministerio de la Defensa, de la seguridad exterior, de conformidad con el contenido de los Acuerdos de Paz y la Ley Marco de Seguridad Nacional.
- f) **Diversidad y pluriculturalidad.** Se reafirma y respeta el carácter multiétnico, multilingüe y pluricultural de la sociedad guatemalteca. Se reconoce y promueve a las autoridades indígenas, así como su sistema de justicia en general.
- g) **Victimización secundaria.** Es todo acto realizado por personal del sistema de justicia que cause daños físicos o psicológicos a la víctima de un hecho delictivo, con ocasión o al momento de practicar actuaciones de atención, asistencia jurídica, investigación o cualquier intervención del sistema de justicia.
- h) **Derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad.** Se reconocen los derechos de las poblaciones vulnerabilizadas, que incluyen niñez y adolescencia; mujeres; personas adultas mayores; personas con discapacidad; personas privadas de libertad; y, pueblos indígenas migrantes.
- i) **Promoción del diálogo de las partes en conflicto.** Se promueve el diálogo y el entendimiento en los conflictos derivados de las demandas sociales de los habitantes del país, evitando la criminalización de sus líderes y lideresas, cuando sus planteamientos sean basados en el principio de legalidad.
- j) **Publicidad y rendición de cuentas.** Se declara que la población tiene un libre acceso a los contenidos, fines, resultados y actores de los actos de las instituciones públicas, para facilitar su control, aplicando el principio de transparencia y rendición de cuentas, contando con un espacio de difusión pública.



- k) **Enfoque de sistema.** Se fortalece la visión holística e integral de justicia para que los distintos actores concurren de forma coordinada y estructurada en la atención de necesidades de la población.
- l) **Investigación y estudio.** Se declara de necesidad prioritaria, la promoción de la indagación y análisis de las causas que generan los delitos, sobre la base de un enfoque criminológico, multidisciplinario e integral, que permita la adecuada comprensión del fenómeno criminal, sin cuyo conocimiento pleno es imposible abordar su tratamiento, considerándose para este efecto la participación de expertos y universidades nacionales e internacionales.
- m) **Fortalecer las estrategias de seguridad a nivel regional centroamericano.** Se reconoce la importancia de suscribir acuerdos en el Marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), tales como el proyecto de modernización de la legislación contra la delincuencia organizada; así como promover por parte de los ministerios públicos centroamericanos y del Caribe, una política de investigación y persecución penal regional. De igual forma, la celebración constante de reuniones entre cuerpos policiales para el intercambio de información de inteligencia, relacionada con el crimen organizado y la conformación de un archivo regional de huellas (dactilares, balísticas).
- n) **Respeto e incorporación de convenios internacionales.** Se respeta el principio de convencionalidad, implementando y respetando los compromisos adquiridos por el Estado, con la ratificación de los convenios y tratados internacionales, armonizando los compromisos en materia de derechos humanos con los mecanismos penales para la represión y erradicación de la criminalidad. Al reconocer el principio de convencionalidad como uno de los fundamentos filosóficos de la política, el

Estado deberá realizar todos los esfuerzos necesarios para dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos, en el contexto de la persecución de los hechos de criminalidad organizada, violaciones a los derechos humanos



cometidos en tomo al conflicto armado interno y aseguramiento de los derechos de las poblaciones en general y particularmente a las vulnerabilizadas.

**Artículo 6. Ejes fundamentales de la Política.** Los ejes fundamentales mínimos sobre los cuales se fundamenta la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala son:

- a. Prevención
- b. Investigación
- c. Sanción
- d. Reinserción Social

**Artículo 7. Prevención.** El eje de prevención de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala desarrolla acciones articuladas orientadas a incidir en las estructuras sociales que mejoren las condiciones, económica, social, educativa, cultural y política de las y los guatemaltecos, a fin de reducir o evitar la comisión de hechos delictivos, potenciando las condiciones que permitan una efectiva prevención del delito y la violencia; y, la construcción de una cultura de legalidad y tolerancia ciudadana.

**Artículo 8. Objetivo de la prevención.** El objetivo del eje de prevención radica en abordar de manera integral el conjunto de factores sociales, económicos y culturales que inciden en la comisión de hechos delictivos, con las particularidades de cada uno de los Departamentos de la República de Guatemala y de los delitos y fenómenos criminales priorizados, con participación de los diferentes actores estatales, organizaciones de la sociedad civil, autoridades indígenas, sector académico y el sector privado, entre otros.



**Artículo 9. Lineamientos estratégicos del eje de prevención.** El eje de prevención de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala, debe desarrollarse en los siguientes lineamientos estratégicos mínimos, susceptibles de ser superados:

- a. Implementar la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica.
- b. Desarrollar mecanismos de alerta temprana de conflictos que permitan abordar en forma preventiva la conflictividad social.
- c. Articular los esfuerzos que permitan generar acciones comunitarias para promover la convivencia armónica, el fortalecimiento del tejido social y el fomento de la paz social.
- d. Promover, a través del Consejo del Sistema Nacional de Política Criminal, la definición, implementación, monitoreo, seguimiento, evaluación y recomendaciones para la toma de decisiones en materia de política criminal; así como la modificación de leyes, reglamentos y protocolos que aseguren el fortalecimiento de la ética pública, la independencia judicial, entre otros.
- e. Incrementar y mejorar los mecanismos de atención integral para las víctimas, que consideren con especial atención las necesidades de la niñez, la adolescencia, la juventud, las mujeres, las personas adultas mayores, las personas privadas de libertad, las personas migrantes, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas, a través del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima de Delito.
- f. Implementar mecanismos de atención para potenciales victimarios.
- g. Implementar campañas de sensibilización de la cultura de paz, convivencia armónica y tolerancia ciudadana, fomentando principios y valores a través



de los diferentes medios de comunicación masivos, orientadas a reducir la discriminación, el racismo, el sexismo, la corrupción y la impunidad, entre otros.

- h. Fortalecer el sistema de justicia de los pueblos indígenas, de manera que contribuyan a la prevención del conflicto en sus entornos comunitarios.
- i. Fortalecer a las instituciones estatales que tengan incidencia en la prevención de los fenómenos criminales.
- j. Implementar mejoras en los mecanismos de reclutamiento y selección de empleados y funcionarios del sector justicia y seguridad ciudadana; así como mecanismos de evaluación de desempeño institucional y fortalecimiento de las carreras profesionales en general.
- k. Implementar campañas de sensibilización y mecanismos que brinden confianza a la ciudadanía, para promover la cultura de denuncia contra la corrupción y demás hechos delictivos.
- l. Fortalecer y crear agendas de abordaje integral para la prevención del delito a nivel nacional, regional, departamental, municipal y comunitario, haciendo énfasis en la inclusión social de poblaciones vulnerabilizadas, como la niñez, la adolescencia, la juventud y las mujeres.
- m. Asegurar que las acciones de las políticas públicas y de política criminal respondan a las necesidades, intereses y problemas de la niñez, adolescencia y juventud, garantizando en su formulación, la opinión de los mismos.
- n. Promover la implementación de la "Política Pública de Promoción y Desarrollo de las Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunidades" que contribuye al empoderamiento de las mujeres de manera integral.



- o. Fortalecer el sistema normativo que garantice la protección de la industria nacional frente a la competencia desleal, originada de actividades ilícitas como el contrabando y la evasión fiscal.
- p. Promover acciones estratégicas e integrales orientadas a la transformación de imaginarios sociales en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, para la erradicación de la discriminación, misoginia y violencia contra la mujer.
- q. Diseñar e implementar mecanismos de atención urgente para evitar linchamientos.
- r. Todos aquellos lineamientos estratégicos que permitan alcanzar el objetivo previsto para el eje de prevención.

**Artículo 10. Investigación.** El eje de investigación de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala articula la investigación criminal, generando mecanismos más adecuados de uso de la información; planificación de acciones estratégicas a nivel nacional y regional; selección de casos; y, para enfrentar los distintos fenómenos criminales, particularmente de las áreas priorizadas, de conformidad con las condiciones específicas de los distintos departamentos y su incidencia criminal.

**Artículo 11. Objetivos de la investigación.** Los objetivos del eje de investigación son:

- a. Potenciar y concentrar la investigación criminal con un modelo coordinado y articulado entre las entidades competentes, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, a fin de evitar la duplicación y dispersión de los esfuerzos. Lo anterior con plena observación del principio de objetividad, legalidad, razonabilidad y respeto a los derechos humanos.



- b. Abordar los fenómenos violentos y delitos priorizados, bajo la lógica de la investigación criminal, criminológica, criminalística y de persecución penal estratégica, nacional y regional.
- c. Potenciar el carácter científico de la investigación criminal.
- d. Garantizar una adecuada investigación de los hechos vinculados con las violaciones de derechos humanos, que incluyan las ocurridas en el contexto del conflicto armado interno, así como las cometidas por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, crimen organizado y grupos de pandillas.
- e. Establecer una articulación efectiva entre los mecanismos de investigación del sistema de justicia oficial y el de las autoridades indígenas.
- f. Garantizar que la investigación de los hechos delictivos cometidos por adolescentes en conflicto con la ley penal, se lleve a cabo bajo el estricto cumplimiento del sistema de derechos y garantías otorgadas por la legislación interna y los principios del derecho internacional, minimizando el uso del sistema judicial.

**Artículo 12. Lineamientos estratégicos del eje de investigación.** El eje de investigación de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala debe desarrollarse en los siguientes lineamientos estratégicos mínimos, susceptibles de ser superados:

- a. Establecer el modelo de investigación centralizado, científico y especializado, bajo la dirección funcional del Ministerio Público.
- b. Articular acciones de inteligencia civil en la investigación criminal, bajo el enfoque de los delitos priorizados, fenómenos violentos, estructuras criminales y mercados criminales, teniendo en cuenta el contexto social, económico, político desde cada departamento.





- c. Organizar y fortalecer la investigación criminal a través de una articulación interinstitucional y unidades especializadas.
- d. Profesionalizar a los actores responsables de la investigación criminal, promoviendo la carrera del Organismo Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública Penal y demás agentes investigadores con enfoque de derechos humanos, de género, victimológico, pertinencia cultural y lingüística. Así mismo, la creación de un centro académico de investigación criminal.
- e. Fortalecer la centralización, y la recopilación de la información estadística que uniforme los mecanismos de obtención de datos y facilite el desarrollo de análisis estratégicos para el abordaje de los hechos de criminalidad priorizados.
- f. Reformular la política de protección a testigos, de manera que considere los recursos financieros para la transformación de infraestructura, elaboración de protocolos que permitan la medición de riesgos y los elementos necesarios para el resguardo de su integridad física.
- g. Diseñar políticas de protección a operadores de justicia que aseguren su integridad física y contribuyan a generar las condiciones de un ejercicio profesional objetivo, sin temores ni presiones externas que provoquen impunidad o corrupción.
- h. Suscribir convenios y protocolos de cooperación técnica y financiera entre instituciones nacionales e internacionales responsables de la investigación, para el combate del contrabando, la evasión fiscal, lavado de activos, tráfico de armas, narcotráfico, violencia contra la mujer, la niñez y la juventud.
- i. Incrementar las capacidades técnicas y presupuestarias de las instituciones del sistema de justicia, en especial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF-, para potenciar el carácter científico de la investigación criminal y lograr la ampliación de su cobertura.



- j. Brindar recursos efectivos que aseguren a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición.
- k. Implementar coordinaciones interinstitucionales entre las autoridades del sistema de justicia oficial y las autoridades indígenas del país, para integrar la investigación que se realice en ambos sistemas.
- l. Asegurar que la intervención del Estado en el ejercicio del poder punitivo contra los adolescentes en conflicto con la ley penal no será arbitraria ni atentatoria de los derechos humanos y se orientará a minimizar el uso del sistema judicial tradicional, reservándolo para los casos realmente graves.
- m. Fomentar la investigación y persecución penal estratégica que permita la desarticulación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad en el país.
- n. Todos aquellos lineamientos estratégicos que permitan alcanzar los objetivos previstos para el eje de investigación.

**Artículo 13. Sanción.** El eje de sanción de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala racionaliza el uso de la pena privativa de libertad, considerando la intensidad de la lesión a los bienes jurídicos que afecta a la convivencia armónica, las condiciones particulares del autor del hecho delictivo y de la víctima, en proporcionalidad a la afectación del bien jurídico lesionado. Reconoce la necesidad de fortalecer los mecanismos de resolución alterna de conflictos y ampliar las alternativas de sanción previstas en la legislación penal.

**Artículo 14. Objetivos de la sanción.** Los objetivos del eje de sanción son:

- a. Incluir sanciones penales alternativas orientadas a retribuir el daño causado a las víctimas del delito y el retorno al contexto social de la persona infractora de la ley penal.



- b. Revertir, conforme a los principios democráticos del estado de derecho, el enfoque, de populismo punitivo y el derecho penal del enemigo en la legislación penal.
- c. Humanizar la imposición y cumplimiento de la sanción penal.
- d. Promover la flexibilización y diversificación de la reacción penal para los adolescentes en conflicto con la ley penal.

**Artículo 15. Lineamientos estratégicos del eje de sanción.** El eje de investigación de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala debe desarrollarse en los siguientes lineamientos estratégicos mínimos, susceptibles de ser superados:

- a. Lograr imposición de penas proporcionales y certeras, inclusión de un catálogo de penas alternativas de prisión y fortalecer los mecanismos sancionatorios, para que cumplan con los fines rehabilitadores, de reinserción social y dignificación de las víctimas.
- b. Revisar la normativa penal, con el fin de adecuar sus disposiciones a los principios del estado de derecho, mediante la uniformidad, exclusión de conductas de mínima lesividad y el desarrollo de un catálogo de penas alternativas a la prisión, considerando las particularidades de las poblaciones vulnerabilizadas.
- c. Priorizar el fortalecimiento y crecimiento proporcional de las instituciones del Estado vinculadas a la seguridad ciudadana y justicia con una visión integral de sistema.
- d. Articular el sistema propio de pueblos indígenas con el sistema de justicia oficial, garantizando el respeto del pluralismo jurídico en el ejercicio de las funciones de autoridades indígenas, de conformidad con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-; así



como el respeto a los derechos humanos de las personas que se sometan al sistema de justicia de los pueblos indígenas.

- e. Fortalecer los procesos de capacitación, sensibilización y especialización de los funcionarios y empleados del sector justicia y seguridad ciudadana, que permita la atención integral de víctimas de delitos en todos los enfoques transversales que establece la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala.
- f. Fomentar la aplicación de medidas de justicia restaurativa y otros mecanismos sustitutivos de la sanción del régimen interno en el sistema de justicia penal juvenil.
- g. Adoptar mecanismos que aseguren que los derechos de las víctimas, en especial los que derivan de violaciones graves a los derechos humanos, no estarán restringidos a la reparación económica, sino que deben incluir pretensiones de verdad, justicia, reparación integral y garantía de no repetición.
- h. Excluir de la investigación criminal y persecución penal, los actos de los pueblos indígenas derivados de su práctica cultural, conforme a su cosmovisión, garantizando la coexistencia de los dos sistemas y su respeto mutuo mediante los parámetros establecidos por los instrumentos internacionales.
- i. Implementar el uso de mecanismos telemáticos como alternativa a la privación de libertad.
- j. Todos aquellos lineamientos estratégicos que permitan alcanzar los objetivos previstos para el eje de sanción.

**Artículo 16. Reinserción social.** El eje de reinserción social de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala articula los esfuerzos orientados a disminuir el hacinamiento carcelario, mejorar las condiciones de reclusión, generar



mecanismos que posibiliten el cumplimiento del fin resocializador y rehabilitador de la sanción y políticas para el retorno de las personas que egresan del sistema penitenciario al contexto social, evitando que vuelvan a delinquir.

**Artículo 17. Objetivos de la reinserción social.** Los objetivos del eje de reinserción social son:

- a. Asegurar condiciones integrales de rehabilitación para que las personas privadas de libertad y quienes egresan de prisión, así como quienes cumplieron un trabajo comunitario impuesto por autoridades indígenas, no vuelvan a delinquir.
- b. Lograr que el egreso de los adolescentes en conflicto con la ley penal de los centros de privación de libertad, sea consecuencia lógica de un proceso de aprendizaje enriquecedor de capacidades y disposiciones personales.

**Artículo 18. Lineamientos estratégicos del eje de reinserción social:** El eje de reinserción social de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala debe desarrollarse en los siguientes lineamientos estratégicos mínimos, susceptibles de ser superados:

- a. Implementar la política pública de reinserción y régimen progresivo para las personas privadas de libertad (PNRP), con enfoque de derechos humanos, de género, y de pertinencia cultural y lingüística, de conformidad con los instrumentos internacionales en la materia.
- b. Promover, a través del sistema de justicia, los programas de atención diferenciada aprobados por el Sistema Penitenciario.
- c. Promover políticas de egreso penitenciario, atendiendo los ejes transversales y enfoques de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala.



- d. impulsar mecanismos efectivos de rehabilitación y resocialización de las personas que han sido sancionadas por el sistema penal.
- e. Generar programas de servicios de transición y apoyo estatal para personas con alto grado de vulnerabilidad y posibilidades de reincidencia.
- f. Crear de manera progresiva, programas institucionales que promuevan el adecuado cumplimiento de medidas socioeducativas de adolescentes en conflicto con la ley penal en la comunidad, después del cumplimiento de una sanción.
- g. Crear el Consejo Nacional para la Evaluación de la Situación de la Niñez y Juventud Infractora de la Ley Penal.
- h. Conformar una instancia que armonice y asegure el control de las condiciones de las personas que egresan de prisión y de las que cumplen alguna condición, atendiendo a los ejes transversales y enfoques de la política.
- i. Organizar en forma articulada entre las instituciones estatales, las organizaciones de sociedad civil y la iniciativa privada, el egreso y el retomo al contexto social de los adolescentes en conflicto con la ley penal.
- j. Promover que las autoridades indígenas apliquen mecanismos de atención especializada para las personas que han sido sancionadas bajo sus disposiciones.
- k. Todos aquellos lineamientos estratégicos que permitan alcanzar los objetivos previstos para el eje de reinserción social.

**Artículo 19. Ejes transversales de la Política Criminal Democrática del**  
**Guatemala.** Los ejes transversales de la Política Criminal Democrática

**Estado de**



del Estado de Guatemala son orientaciones que deben estar presentes en toda su implementación; los que se enumeran a continuación:

a. **Lucha contra la corrupción.** Se deberán implementar los mecanismos institucionales orientados a eliminar las prácticas de corrupción en el ejercicio de la administración pública y el sector privado, fortaleciendo la promoción de los valores propios del estado democrático de derecho, la transparencia, la rendición de cuentas y la cultura de denuncia, asegurando mecanismos de protección al denunciante, así como el desarrollo de campañas de sensibilización, entre otras.

b. **Lucha contra la impunidad.** De manera transversal se deben desarrollar los mecanismos que aseguren la eficaz denuncia, investigación y sanción de los responsables de los fenómenos criminales y los delitos priorizados, de manera que se contribuya también a imponer las sanciones adecuadas a quienes cometen hechos delictivos y desarticular grupos de criminalidad organizada y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a toda la población guatemalteca.

c. **Lucha contra la discriminación y el racismo.** La implementación de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala debe asegurar la coordinación de acciones interinstitucionales, con la participación de la sociedad civil, la academia, la iniciativa privada y los pueblos indígenas entre otros, orientadas a prevenir, investigar y sancionar el trato desigual de las personas por razones de etnia, condición económicas, orientación sexual e identidad de género, creencias, en todo el quehacer de las instituciones del sector justicia.

d. **Ética y profesionalismo.** Se deberán promover acciones orientadas a mejorar la formación profesional, ética y académica en coordinación con las instituciones educativas, colegio de abogados y organizaciones profesionales, como herramienta de fortalecimiento de la administración de justicia.



**Artículo 20. Enfoques y perspectivas.** Los enfoques y perspectivas que deben estar reflejadas en todas las decisiones de la Política Criminal Democrática son:

- a. **Enfoque de género.** Permite visibilizar la desigualdad social construida a partir de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Además, es una herramienta útil para la eliminación de la discriminación contra las mujeres, a fin de promover la equidad e igualdad entre los seres humanos; y con su incorporación en la Política Criminal Democrática, se reconoce que hombres y mujeres son diferentes biológicamente, pero iguales en dignidad y derechos; por lo tanto, el abordaje que debe hacerse a la prevención, investigación, sanción y reinserción social debe ser diferenciada y especializada con base a las necesidades específicas de las personas. En ese sentido, el Estado debe garantizar y respetar los derechos humanos de todas las personas, en especial de las mujeres, atendiendo a su condición, situación y posición dentro de la estructura social y asegurando su acceso a las oportunidades que le permitan su desarrollo pleno.
- b. **Perspectiva Victimológica.** Visibiliza a la víctima del delito como un importante sujeto de derecho. Lo cual permite que la planificación, ejecución y decisiones en materia de política criminal sean más eficaces y eficientes. Además, contribuye al diseño de modelos de atención que respondan a las necesidades de la víctima, así como a la restitución de sus derechos y del daño ocasionado por el delito, tanto en el sistema de seguridad y justicia, como en materia de política pública en general. La atención a la víctima del delito debe ser inmediata, con calidad, calidez y con pertinencia cultural, garantizando y respetando sus derechos humanos. El diseño de políticas institucionales e interinstitucionales de atención a la víctima del delito es fundamental para la reducción de la victimización secundaria y para que el sistema de justicia no excluya a la víctima y pueda ejercer su derecho a la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación digna e integral. Además, permite que la víctima se convierta en aliada estratégica en el proceso penal.





- c. **Pertinencia cultural y lingüística.** Promueve la adaptación los servicios que prestan las instituciones del sistema de justicia y seguridad ciudadana a la cultura o cosmovisión de las personas integrantes de pueblos indígenas y la atención en su propio idioma. Desde la consideración de la pertinencia cultural, es indiscutible que la visión de los pueblos indígenas debe tomarse en cuenta en las decisiones que se tomen en el abordaje de los hechos delictivos y los mecanismos de solución de conflictos que ellos implementan. La Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala, deberá crear las herramientas que aseguren que el servicio pública de administración de justicia garantice la atención en el idioma de cada pueblo, la consideración a las condiciones específicas del lugar, la exclusión del racismo, la no revictimización y el respeto a la forma de solución de los conflictos por parte de pueblos indígenas, así como desarrollar las bases para la coexistencia del pluralismo jurídico.
- d. **Acceso a la justicia para poblaciones vulnerabilizadas.** Garantizar que las poblaciones vulnerabilizadas cuenten con las condiciones necesarias para conocer, promover, ejercer y defender sus derechos y obligaciones, asegurando la igualdad de trato ante la ley y la no discriminación, de manera que las instituciones del sistema de justicia y seguridad ciudadana garanticen un trato digno, implementen procedimientos especializados de atención, establezcan infraestructura adecuada en sus instalaciones y desarrollen campañas de sensibilización sobre las necesidades particulares de estas poblaciones.

**Artículo 21. Estrategia de comunicación.** El diseño de una estrategia de comunicación es indispensable para la divulgación de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala, atendiendo a la necesidad de involucrar a los medios de comunicación; en un abordaje adecuado y responsable de los hechos noticiosos vinculados con la violencia y la criminalidad, dado el enorme impacto que tienen sobre la percepción de seguridad en la ciudadanía.

La divulgación de la política criminal deberá dirigirse a dos sectores:



- a. **Al interior.** A todos los operadores del sistema de justicia penal, a través de los recursos interinstitucionales que permitan dar a conocer los principios y lineamientos de la política y el fomento de principios que permitan prevenir comisión de hechos delictivos, con el fin de que puedan intervenir como ejecutores positivos de las acciones contempladas y contribuyan a generar el consenso necesario.
- b. **Al exterior.** La estrategia de comunicación deberá orientarse a divulgar la PCDEG a la población, con el objeto de fomentar la participación institucional y ciudadana en los planes de política criminal y políticas públicas tendientes a fortalecer la cultura de paz y convivencia pacífica, retomando la confianza y credibilidad en las instituciones del Estado.

### CAPITULO III

#### SISTEMA NACIONAL DE POLITICA CRIMINAL DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE GUATEMALA

**Artículo 22. Sistema Nacional de Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala.** Se crea el Sistema Nacional de Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala para coordinar y facilitar la articulación entre instancias de gobierno y de la sociedad guatemalteca, y para el abordaje integral de la criminalidad y la violencia en el país, en el marco de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala.

**Artículo 23. Objetivo.** El objetivo del Sistema Nacional de Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala es disminuir los índices de criminalidad y violencia social, mediante la implementación de acciones de prevención, investigación, sanción y reinserción y otras que resulten necesarias, que permitan el desarrollo integral, la convivencia social armónica y seguridad ciudadana para las y los guatemaltecos.



**Artículo 24. Integración del Sistema Nacional de Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala.** El Sistema Nacional de Política Criminal se integra por:

- a. Consejo Nacional del Sistema de Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala.
- b. Secretaria Ejecutiva del Sistema de Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala.

**Artículo 25. Consejo Nacional del Sistema de Política Criminal.** Se establece el Consejo Nacional del Sistema de Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala integrado por el Presidente de la República, quien lo preside; el Presidente del Congreso de la República; el Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia; y, el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público.

Los integrantes del Consejo podrán ser representados de la manera siguiente:

- a) En el caso del Presidente de la República, por el Ministro de Gobernación.
- b) En el caso del Presidente del Congreso de la República, por el presidente de la Comisión de Reformas al Sector Justicia.
- c) En el caso del Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, por uno de los Magistrados de la Cámara Penal.
- d) En el caso del Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, por el Secretario de Política Criminal.

**Artículo 26. Funciones.** El Consejo Nacional del Sistema de Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala es el encargado de:



1. Garantizar el cumplimiento de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala.
2. Definir, implementar, monitorear, evaluar, actualizar y recomendar las acciones en materia de Política criminal, contenidas en la política pública denominada Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala, presentada por los tres Poderes del Estado y el Ministerio Público.
3. Suscribir los documentos e instrumentos que sean necesarios para facilitar la implementación de las decisiones, acciones y medidas en materia de Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala.
4. Procurar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento y el alcance de los objetivos del Sistema Nacional de Política Criminal.
5. Recomendar la aprobación, reforma y derogatoria de normas atinentes a la política criminal, para evitar la vigencia de leyes casuísticas o espontáneas; así como la revisión de toda aquella legislación y demás instrumentos jurídicos que deban adecuarse a los principios y lineamientos de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala.
6. Promover la reforma constitucional necesaria para fortalecer el sistema de justicia, que garantice el principio de independencia judicial, contribuyendo a reducir los niveles de impunidad y corrupción; además, que contemple mecanismos de elección y selección de funcionarios y empleados públicas basados en méritos de idoneidad, capacidad y probidad.
7. Presentar públicamente un informe anual sobre los resultados obtenidos.

**Artículo 27. Sesiones ordinarias:** El Consejo sesionará ordinariamente cada dos meses, mediante convocatoria del Presidente de la República. De cada sesión deberá faccionarse un acta que contenga los acuerdos finales de las sesiones de trabajo.



**Artículo 28. Sesiones extraordinarias.** El Consejo se podrá reunir extraordinariamente en cualquier tiempo, ya sea por convocatoria del Presidente de la República o por solicitud de cualquiera de los integrantes del Consejo.

#### CAPITULO IV

#### SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DEL SISTEMA DE POLÍTICA CRIMINAL DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE GUATEMALA

**Artículo 29. Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional del Sistema de Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala.** La Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional del Sistema de Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala será coordinada por un Secretario Ejecutivo, quien es el encargado de dar seguimiento a las decisiones asumidas por los miembros del Consejo del Sistema Nacional de Política Criminal, para lo cual tendrá a su cargo la coordinación administrativa y técnica multidisciplinaria necesaria. La Secretaría Ejecutiva estará adscrita al Ministerio Público.

**Artículo 30. Funciones.** Son funciones del Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional del Sistema de Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala, las siguientes:

1. Ejecutar las decisiones asumidas por el Consejo.
2. Establecer las coordinaciones necesarias para la adecuada ejecución de las decisiones del Consejo.
3. Elaborar y proponer al Consejo proyectos de convenios de cooperación.
4. Centralizar, sistematizar y analizar la información criminal, a partir de los sistemas y registros oficiales y demás fuentes de información.
5. Presentar bimensualmente al Consejo informe del avance en la implementación de las decisiones y acciones designadas.



6. Elaborar y presentar al Consejo el Plan Estratégicos de Implementación y el Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala, el cual debe establecer claramente la División de tareas o acciones específicas, indicadores, metas, responsabilidades nacionales, regionales, municipales y comunitarias, así como los recursos y los responsables, dado que las condiciones territoriales son distintas y la criminalidad adquiere diferentes matices, según las distintas localidades.
7. Presentar anualmente su Plan Operativo Anual.
8. Apoyar con las convocatorias de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo.
9. Participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, faccionar y resguardar las actas correspondientes.
10. Suministrar información actualizada al Consejo, relativa a las tendencias y al comportamiento de los fenómenos criminales, así como la información que sea de utilidad para la toma de decisiones del Consejo.
11. Otras que conforme a la ley y otras disposiciones corresponda.

## CAPITULO V

### DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

**Artículo 31. Recursos.** El Ministerio Público dispondrá del personal y los recursos necesarios para el funcionamiento de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional del Sistema de Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala, establecida en la presente ley.

**Artículo 32. Primera sesión ordinaria.** El Presidente de la República, dentro de los quince días de entrada en vigencia la presente ley, deberá convocar a la



primera sesión ordinaria del Consejo Nacional del Sistema de Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala; oportunidad en la que el Fiscal General y Jefe del Ministerio Público deberá informar quien fungirá como Secretario Ejecutivo.

En caso la primera sesión no fuese convocada, cualquiera de los integrantes del Consejo podrá convocar en forma extraordinaria.

**Artículo 33. Reglamento.** Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Consejo Nacional del Sistema de Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala deberá aprobar el reglamento respectivo, propuesto por el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional del Sistema de Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala.

**Artículo 34. Vigencia.** La presente ley entra en vigencia ocho días después de su publicación el Diario Oficial.

**REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACION.**

**EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA  
EL \_\_\_\_\_ DE DOS MIL DIECISÉIS.**

